



Centro de Asesoría y Estudios Sociales
Atocha, 91 2º
28040 Madrid
Tel: 91 429 11 13 Fax: 91 429 29 38
www.nodo50.org/caes caes@nodo50.org

Entre el hambre y la comida basura

Por un consumo agroecológico responsable

La inseguridad alimentaria en lo que respecta a la cantidad y distribución de los alimentos, es un problema antiguo y sangrante por ser la causa directa de la malnutrición, el hambre y la muerte de una parte significativa de la población mundial. Formular adecuadamente este problema supone interrogarse sobre el modelo de producción, distribución y consumo de alimentos propiciado por la Organización Mundial para la Alimentación (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) e impulsado por la Organización Mundial de Comercio (OMC), a través de la liberalización del comercio de los productos agrícolas.

La calidad y la seguridad de los alimentos que comemos está cada vez más en entredicho. Con ello, crece la desconfianza de la población. Los escándalos alimentarios han sacado a la luz las contradicciones de la alimentación actual. Los ingredientes: dioxinas en los pollos, priones locos en las vacas, transgénicos y antibióticos para el engorde; las formas y condiciones de producción y de trabajo en el campo y en las industrias de transformación: intensificación de cultivos y ganado, alteración de los procesos naturales, competitividad y abaratamiento de costes a ultranza, mano de obra precarizada en las industrias de transformación y empleada en condiciones de esclavitud en los invernaderos; las formas de distribución y consumo: concentración y monopolio de empresas transnacionales que controlan producción-distribución-consumo, predominio de grandes superficies que ofrecen gran variedad de alimentos importados a bajo coste y que emplea a jóvenes mediante contratos basura, generalización de restaurantes de comida rápida, etc. Esta es la dimensión cualitativa de la falta de seguridad alimentaria que afecta a la salud.

Se promueven alimentos transgénicos, semillas estériles y patentes sobre seres vivos, como la solución de los problemas originados por la agricultura industrial cuando, en realidad, son la máxima expresión de dicho modelo de producción industrializada de alimentos. Un modelo que se desentiende tanto de las necesidades sociales y ecológicas, como de sus consecuencias actuales y futuras. Que crece en abierta oposición a los derechos de la población (campesina o consumidora) a una alimentación suficiente, saludable y nutritiva, a una vida digna en su propia tierra y a su cultura tradicional.

El modelo globalizado de alimentación

Este modelo capitalista de alimentación a nivel mundial ha demostrado ya su incapacidad para resolver los problemas de seguridad alimentaria. Es más, activa las condiciones para el aumento de la inseguridad, tanto desde el punto de vista de la cantidad, como de la calidad de los alimentos:

1. No se produce lo que necesita la población para una alimentación sana y suficiente, sino lo que asegura más beneficios al capital invertido.
2. Al perseguir el abaratamiento de los costes y la competitividad en una cadena de distribución planetaria, este modelo enfrenta a productor@s y consumidor@s en intereses contrapuestos y enormemente alejados.

3. Elimina la pequeña producción agroalimentaria y a l@s campesin@s, reemplazándoles por empresas o sociedades anónimas que concentran la producción y la distribución donde les es más rentable.
4. Convierte la agricultura y la ganadería en una factoría industrial. El oficio y la habilidad del agricultor/a y su conocimiento de la naturaleza no tienen el menor valor siendo sustituidos por producción en serie.
5. Se trata a los animales como máquinas productoras de carne, leche o huevos, con los riesgos ya conocidos de alteración del ciclo natural, la generación de enfermedades como la EEB (“vacas locas”), la propagación de salmonella, listeria, E. Coli, activada por el hacinamiento del ganado y transmitida a personas que manipulan e ingieren carne o productos derivados, la contaminación de los piensos por dioxinas, etc.
6. No se vela por la calidad de los alimentos sino, tan sólo, por el cumplimiento de la legalidad: informar en las etiquetas, no incorporar productos prohibidos o en dosis no autorizadas. A las sustancias nuevas que van a ser autorizadas para intervenir en la producción de alimentos, no se les pide la ausencia de riesgos directos o indirectos para la salud o el medio ambiente. Se aceptan ciertos umbrales de contaminación y riesgo y sólo se abordan los riesgos conocidos. No se aplica el principio de precaución ante la duda o los riesgos de los que se desconoce su resultado.
7. Se viola el derecho a la soberanía alimentaria como “derecho de los pueblos a definir su propia política agraria y alimentaria”, mientras se consolidan las patentes sobre la vida. Las patentes son derechos de propiedad intelectual sobre semillas, plantas, animales y células humanas, de uso exclusivo para quien paga a la multinacional propietaria, aunque esta se lo haya robado a la comunidad que los conserva y depende de ellos, e incluso a la persona que generó tales células, sin su consentimiento.
8. Se esquilman y privatizan territorios, recursos naturales, agua, suelo, semillas, etc., provocando una contaminación y desertización crecientes que aumentan la dependencia, la pobreza, el hambre, el desarraigo y la emigración forzosa.

La intervención de las Instituciones Internacionales y de los Gobiernos

A pesar de todo esto, ni la FAO ni la OMS se cuestionan este modelo productivo que provoca inseguridad alimentaria. Separan las dos dimensiones de la seguridad alimentaria (cantidad y calidad) y promueven tan sólo soluciones técnicas. En el caso de la calidad de los alimentos proponen controles analíticos cuya premisa es la demostración fehaciente del efecto perjudicial sobre la salud (eliminan sólo los productos que han demostrado ser la causa de enfermedades graves o muertes directas). En el caso de la cantidad, la solución es acelerar la industrialización agraria y alimentaria. El Gobierno de Bush presionaba en la última Cumbre Mundial de la Alimentación, junio 2002, para impulsar la ingeniería genética como solución al problema del hambre. Pero plantearse aisladamente ambos problemas y buscar soluciones meramente técnicas es no querer resolverlos. No interrogarse sobre las causas que cronifican el hambre y la malnutrición por un lado, y que extienden y profundizan el deterioro de la calidad de los alimentos por otro, lleva a soluciones parciales, contradictorias, compasivas, que reproducen y agudizan un ciclo en el que l@s afectad@s ni siquiera pueden articular sus propias estrategias de defensa de la salud y la nutrición. No pueden ejercer su derecho a la soberanía alimentaria.

En el ámbito de la Unión Europea, al igual que en el resto de países ricos, la dimensión más evidente para la gran mayoría de sus ciudadan@s es la calidad alimentaria. Las instituciones y los gobiernos de la UE, incluido el Gobierno que preside Az-

nar, responsables de la autorización de los productos que intervienen en la elaboración de alimentos, dicen sin el menor pudor, que el riesgo cero no existe. No dan garantías de calidad para toda la población. Se limitan a identificar seguridad alimentaria con inocuidad. El mercado es la institución que “debe solucionar” este problema. Se promueven etiquetas que fijan distintos niveles de calidad: alimentos ecológicos, alimentos naturales, alimentos de denominación de origen. Lo que queda sin etiquetar son alimentos convencionales y comida basura. Es decir, nichos de mercado que estratifican a la población consumidora por su poder adquisitivo. La alimentación suficiente y saludable no es un derecho para toda la población. La Política Agraria Común (PAC), desconsidera el impacto sobre la seguridad alimentaria de otros países y pone en un segundo plano todas las dimensiones (social, campesina, ecológica, etc.) que no tengan que ver con el abaratamiento de los costes y la competitividad de los productos agrícolas en el mercado mundial.

La Cumbre de Johannesburgo de Desarrollo Sostenible, segunda edición de la Cumbre de Río en 1992 e iniciada el 26 de agosto de 2002, congrega a gobiernos de 180 países. Debería ser un foro para replantearse el rumbo e impedir que la economía sea el argumento para aplazar, una vez más, las soluciones a los problemas alimentarios, sociales y ecológicos. De hecho las grandes líneas de la Cumbre se refieren a erradicar la pobreza, modificar las modalidades insostenibles de producción y consumo, proteger y gestionar los recursos naturales, comercio global, salud y desarrollo sostenible. Sin embargo, tras la primera Cumbre de la Tierra, a pesar de los diversos compromisos de los Gobiernos, no sólo no se han reducido los problemas, sino que han aumentado. Se dice que esta segunda cumbre es Río menos 10, porque se han perdido estos diez años. El panorama se presenta poco prometedor. El presidente Bush no se ha dignado comparecer. El segundo bloque económico del mundo, la UE, ha elaborado una propuesta de Pacto Global que incluye entre sus objetivos desligar el crecimiento económico de la presión sobre los recursos medioambientales en energía, residuos, uso de sustancias químicas y biodiversidad. Pero la solución que promueve dicho Pacto Global, en el fondo, es aumentar la liberalización de los mercados a cambio de apoyar la condonación de la deuda externa e invertir y transferir tecnologías a los países del Sur. Liberalización de los mercados en energía, agua y biodiversidad significa que la riqueza potencial de tales recursos, radicada sobretudo en los países del Sur y soporte de comunidades indígenas y campesinas, quede “libre” en condiciones de mercado (es decir, privatizable) para ser “gestionada” y “protegida” por el capital internacional. Por eso, ha acudido una nutrida representación de los intereses empresariales para “asesorar” a las delegaciones gubernamentales.

La fragmentación de intereses conduce a falsas soluciones

Desde dentro del modelo agroalimentario dominante, y a pesar de que el cincuenta por ciento de la población mundial es campesina —el ochenta por ciento de ella cultiva sus propios alimentos—, la contraposición de intereses cada vez más enfrentados, entre personas agricultoras y consumidoras, dificulta la elaboración de un discurso que integre las necesidades de tod@s, que vaya a la raíz de los problemas y que permita desarrollar, experiencias y espacios de economía solidaria y apoyo mutuo. Las personas, agricultoras o consumidoras, estamos indefensas en una situación que nos convierte en víctimas y, a la vez, en colaboradores eficientes en nuestra faceta de consumidor@s, productor@s o trabajador@s, reclamando nuestros intereses legítimos, pero individuales y fraccionados. Esta visión fragmentada convierte cada solución en parte del problema. De hecho se presentan soluciones parciales de diverso tipo: a) preservar los derechos de la naturaleza sin atender ni las condiciones en que l@s agricultor@s viven en los pueblos, trabajan y venden el producto de su trabajo, ni la sobreexplotación laboral de trabajador@s inmigrantes, ni las necesidades de l@s consumidor@s; b) proporcionar alimentos sanos, biológicos, para quién pueda pagarlos,

promoviendo un segmento de mercado biológico de élite, pero sin cuestionar el modelo de producción y distribución, desentendiéndose de las condiciones de vida de la mayor parte de las personas consumidoras; c) soluciones que sólo parten de las necesidades e intereses del sector agrario, profundizan más la brecha entre población agraria y población consumidora. Agudizan las dificultades para que haya alimentos sanos y suficientes para toda la población y tampoco garantizan la viabilidad de las explotaciones agrarias familiares o comunitarias, tanto del norte como del sur; d) iniciativas de comercio justo Norte-Sur, que tienen la mejor intención solidaria con campesinos del Sur, pero no dan cuenta de la realidad que afecta a los campesinos del Norte, también en desaparición, además de ignorar el principio de cercanía. Todas estas razones no deben desconsiderar los múltiples aspectos positivos que contienen muchas de las iniciativas “parciales” frente a la inseguridad alimentaria, sino mostrar su coexistencia pacífica con un modelo de producción, distribución y consumo de alimentos irreformable e incompatible con la seguridad alimentaria de la inmensa mayoría de la población mundial.

Soberanía alimentaria desde el consumo agroecológico responsable

Reclamar la seguridad alimentaria no es una cuestión exclusivamente campesina, sino también ciudadana. No sólo porque el modelo alimentario y sus consecuencias en salud, económicas, ecológicas y sociales nos afectan a tod@s. También porque ejercer la soberanía alimentaria supone reconstruir las relaciones de intercambio en múltiples direcciones: campo-ciudad; campesin@s-consumidor@s; autócton@s-inmigrantes; Norte-Sur; subsidios agrícolas-ayuda alimentaria; pobres de hoy-generaciones futuras; medioambiente según el Norte-agroecología según el Sur. La defensa de la seguridad alimentaria implica saberse parte interviniente, responsable y solidaria en los hábitos de consumo, es decir, a la hora de comprar alimentos cada día.

El conocimiento, la actitud y la responsabilidad ante la propia alimentación es un acto político, de soberanía alimentaria. Educar-nos para alimentar-nos con dignidad y de forma saludable, teniendo en cuenta las consecuencias de nuestra elección, es una tarea necesaria, hoy más que nunca. Las personas involucradas en asociaciones/redes/cooperativas de consumo agroecológico, consideramos que esta es una aportación real y concreta que podemos compartir con otras personas preocupadas que se esfuerzan, desde otras dimensiones de lo social (inmigración, salud, educación, feminismo, sindicalismo, entre otras), por construir un mundo más humano y sostenible hacia el futuro. De la mano de ese empeño, es necesario desarrollar espacios comunes de cooperación entre proyectos de producción y consumo agroecológicos para superar nuestras limitaciones y, si es posible, ayudarnos a resolver algunos de los problemas que venimos teniendo, vinculados en general, a nuestra pequeña escala y al esfuerzo enorme que hay que hacer para que estos proyectos de economía social sobrevivan y se desarrollen.

Es necesario reconstruir las relaciones económicas entre las personas. Hacerlo desde la apuesta colectiva y organizada por un consumo responsable y comprometido con las necesidades de consumidor@s y agricultor@s, respetuoso con los ciclos naturales y las generaciones futuras. Explorar soluciones diversas que tengan en cuenta a todas las partes (producción, consumo y distribución-transporte). Agricultor@s buscando un vínculo con consumidor@s que quieran ver algo más que el producto y el precio. Consumidor@s que se asocian y crean las condiciones para la producción agroecológica. Estas apuestas se llevan haciendo bastantes años desde diversos proyectos alternativos. Pero precisan la vocación de transgredir los límites que marcan el necesario esfuerzo militante y la “identidad propia”. Por un lado, dar seguridad a l@s agricultor@s agroecológic@s. Por otro, asegurar unas condiciones de viabilidad más allá de un consumo de apuesta política testimonial, mostrando a sectores crecientes de

la sociedad que “otra forma de alimentarse es posible”. Todo ello cuidando la escala y la dimensión de los proyectos, porque se puede morir tanto por ser inviable como por ser demasiado viable.

Pilar Galindo (pertenece a CAES y a los Grupos Autogestionados de Konsumo de Madrid)
Agosto de 2002